

# Neo-desarrollismo y kirchnerismo Aportes para un análisis conjunto del modelo de acumulación y la hegemonía en Argentina 2002-2008

Gastón Varesi\* pp. 23-57

## Resumen

El artículo aborda la pregunta en torno a la configuración del modelo de acumulación post-convertibilidad en la Argentina y los principales rasgos de la construcción de hegemonía que asistió a dicho proceso, entre 2002 y 2008. Partimos de una sucinta caracterización de la crisis del 2001, para dar cuenta de las principales dinámicas político-económicas, llegando hasta el conflicto agrario de 2008 que estableció un nuevo punto de inflexión. En este trayecto, abrimos una discusión en torno a la caracterización y nominación del modelo, las potencialidades y tensiones que lo atravesaron, la estructura de clases, el rol del Estado, el debate en torno a los sujetos y la «burguesía nacional», así como los alcances y límites de la construcción hegemónica, analizando la principal fuerza política del período: el kirchnerismo.

## Palabras clave

Modelo de acumulación/ Hegemonía/ Kirchnerismo

## Abstract

This article addresses the question about the configuration of Argentina's post-convertibility accumulation model and the main features of the construction of hegemony attending this process, between 2002 and 2008. We start with a brief characterization of the 2001 crisis, to account for the main political and economic dynamics, reaching the agrarian conflict in 2008, which established a new turning point. In this way, we open a debate on the characterization and designation of the model, its potentialities and tensions, the class structure, the role of the State, the debate on the subjects and the «national bourgeoisie», as well as the range and limits of the hegemonic construction, analyzing the main political force of the period: Kirchnerism.

## Key words

Accumulation model/ Hegemony/ Kirchnerism

\* Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales (FAHCE-UNLP). Investigador Asistente del Conicet (IdHCS). Profesor de «Economía, Política y Sociedad en la Argentina contemporánea» y «Territorio y Sociedad» (Maestría y Doctorado en Cs. Sociales). Coordinador CEFMA-La Plata.  
Correo-e: gastonvaresi@hotmail.com

## Introducción

¿Cuáles son los puentes que articulan las dinámicas políticas y económicas de una sociedad? Nos proponemos abordar un caso específico: la Argentina post-convertibilidad, entre los años 2002 y 2008. Para esto analizaremos dos ejes: el modelo de acumulación y la construcción de hegemonía vinculada, haciendo foco en las principales conclusiones que pueden extraerse del enlace de ambas dimensiones.<sup>1</sup> El momento de partida tiene como antesala un punto de inflexión: la crisis de 2001, que estableció una ruptura en los ejes de hegemonía y acumulación; terminando luego en otro momento de tensión que expresa un cambio al interior del propio período post-convertibilidad: el conflicto agrario de 2008. En este camino, apuntaremos a delimitar los principales alcances, dilemas y tensiones en la configuración político-económica de la Argentina que se extendió hasta fines de 2015.

Entendemos que un modelo de acumulación es un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital, en el cual se observan un conjunto de relaciones sociales regulares, que interactúan de modo relativamente coherente entre sí durante un período determinado, ligadas a tres núcleos constitutivos: las políticas económicas, las variables económicas y las fracciones de clases, observando sus relaciones de fuerzas.<sup>2</sup> A su vez, un modelo se diferencia de otro por el distinto orden de prelación de las relaciones y variables que aparecen como relevantes y características del modelo en estudio. Asimismo, es necesario establecer algunas diferencias con respecto a un régimen de acumulación: a) de escala temporal, dejando el modelo para recortes temporales más breves, constituyendo un subperíodo de un régimen de acumulación y b) de escala espacial, ya que un régimen de acumulación puede recubrir un amplio conjunto de formaciones sociales, mientras que el modelo se acota a una sola, ligada al rango de la política del Estado nacional. Además, podemos pensar momentos dentro de un régimen en que no se pueda delimitar la existencia de un modelo, por ejemplo, por ausencia de regularidades significativas (Varesi, 2010a).

Sostenemos que un análisis más acabado del proceso de acumulación requiere del abordaje de elementos específicamente políticos y culturales. En este sentido, analizamos la construcción de hegemonía, la cual remite (ya en su antecedente leninista) a la dirección política, que en Gramsci es también dirección ideológico-cultural de un grupo social sobre otros, y conforma una relación social que atraviesa distintas dimensiones: parte de un sustrato material ligado a la posición de las clases en la estructura, y se realiza en las

<sup>1</sup>En el artículo se consolidan las principales conclusiones de la investigación que culminó en la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (FAHCE-UNLP) titulada *Modelo de acumulación y hegemonía en la Argentina post-convertibilidad, 2002-2008*, defendida, con la más alta calificación, en marzo de 2013.

<sup>2</sup>En la construcción de este enfoque tomamos como antecedente el trabajo de Torrado (1992) y el análisis de Basualdo (2007) sobre el régimen o patrón de acumulación dominante.

superestructuras, a través de una concepción del mundo que encarna la visión general y expresa los intereses del grupo dirigente, al tiempo que se plasma de formas diversas en el sentido común, en las prácticas cotidianas y, en su momento más desarrollado, en un tipo particular de Estado. En este camino, nos centraremos en la fuerza política predominante en el período: el kirchnerismo. Para esto, indagamos algunos factores de su cultura política<sup>3</sup>, realizando una aproximación a la dimensión política de las relaciones de fuerza, al tiempo que caracterizamos el proyecto político-económico de gobierno que inspira al componente de políticas constitutivo del modelo de acumulación. De este modo, observamos cómo diversos factores políticos y culturales ligados al proceso de construcción de hegemonía inciden sobre el modelo.

Destacamos la relevancia de pensar el Estado, el cual, como señala Poulantzas (1981), sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica, reviste una autonomía relativa, en tanto asegura el interés político general del conjunto del bloque en el poder, organizando el «equilibrio inestable de compromisos» (Gramsci) entre las distintas fracciones, al tiempo que organiza esta hegemonía igualmente respecto de las clases subalternas. Así, las políticas económicas constituyen una acción estatal que incide en la configuración y mantenimiento de un modelo de acumulación; esto en tanto el Estado cumple un rol importante en la orientación económica global, estableciendo «reglas de juego», y en la gestión de parte del excedente, disponiéndolo a construir hegemonía, montando un sistema de transferencias de recursos que busca armonizar a las fracciones de clase en estrecha vinculación con los cambios en sus relaciones de fuerzas. Estos cambios son abordados en la dimensión estructural de la propuesta gramsciana: una relación de fuerzas sociales, estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, analizando a los grupos sociales en relación al desarrollo de las fuerzas materiales de producción, viendo la función y posición que ocupan en la producción misma. Más adelante complementamos dicho análisis con los principales aspectos de las relaciones de fuerzas políticas, a través del análisis en término de hegemonía (Gramsci, 2003).

Así, entendemos que en el despliegue de la acumulación capitalista gravitan elementos de orden ideológico-cultural que inciden en la conformación de las políticas y en la dinámica conflictiva a partir de la cual se abren paso. En este sentido, tomamos elementos de la teoría de la hegemonía, centrada en la perspectiva de Gramsci (2003; 2004), recuperando el enfoque del Príncipe moderno (entendido como fuerza política) y los intelectuales, en su

<sup>3</sup> La noción de cultura política, a pesar de su polivalencia, contiene la potencialidad de articular diversas dimensiones implicadas en nuestro problema de estudio, en tanto el plano de las representaciones, valores y significados de la cultura, se vincula en este concepto con las disputas en torno a estrategias que tienen fuerte incidencia en el plano de la reproducción material, especialmente en el diseño de las políticas.

doble tarea de dirección política (incluyendo la construcción de una voluntad colectiva y la fundación estatal) y de dirección cultural (la creación y difusión de concepciones de mundo a través de una «reforma intelectual y moral»). Asimismo incluimos críticamente aportes de autores posteriores, como la categoría de populismo de Laclau (2005), entendida como lógica político-hegemónica, vinculada a la articulación de demandas que, en tanto representación de faltas, permite conformar una cadena de equivalencias e implica el establecimiento de una frontera delimitando un adversario, en un proceso de conformación identitaria y emergencia de sujetos. Estas lógicas se vinculan con la promesa de plenitud que encarnan los sujetos y constituye un factor clave de la construcción de hegemonía, que se vincula con los proyectos de gobierno como vía de realización de dicha promesa, conteniendo la potencia del mito y avanzando, como el Príncipe moderno, a formar la voluntad colectiva. También recuperamos una segunda vertiente de análisis del populismo a partir de la idea de pacto populista<sup>4</sup> (Rajland, 2008), que contiene una perspectiva de análisis histórico de clases, en clave latinoamericanista y remite a la estrategia, gestada en países del capitalismo periférico, que se basa en conformar un pacto que tiene en el Estado su gestor fundamental y procura la conciliación y armonización entre distintas fracciones de clases dominantes y subalternas. Este enfoque nos permite pensar la construcción de consensos y la armonización de los equilibrios inestables entre fracciones, articulando la noción de pacto con el establecimiento de un sistema de transferencias de recursos.

Partiendo entonces de la centralidad analítica del modelo de acumulación, abordamos el plano de la hegemonía a partir de la profundización del componente de políticas del modelo, indagando dos momentos que consideramos relevantes para su comprensión: a) el proyecto político-económico de gobierno que constituye la matriz ideológica y expresa la unidad de fines políticos y económicos, sirviendo de sustrato a la generación de políticas, y b) la cultura política singular en el que dicho proyecto se enmarca, que, en tanto espacio de representaciones codificadas de una fuerza política, constituye ese subsuelo doctrinal expresado en el discurso que conforma una lectura común del pasado y el futuro de plenitud a construir.

La propuesta en este artículo es comenzar por las conclusiones centrales que alcanzó el proceso de investigación y, desde allí, avanzar a profundizar sobre algunos problemas que, emergiendo en los primeros años de la post-convertibilidad argentina, se fueron conformando

<sup>4</sup>Rajland (2008), cuya conceptualización se desarrolla para pensar al peronismo clásico, señala que el pacto populista implica concesiones mutuas entre las diversas clases: tanto el abandono de los proyectos de emancipación política de la clase trabajadora, con la concomitante legitimación de la sociedad capitalista, como la aceptación por parte de la burguesía de mayores niveles de intervención estatal y regulación económica; ello en el marco de un proyecto que articula un perfil industrializador que garantiza la reproducción de la sociedad burguesa, librándola de las amenazas revolucionarias, aunque incluyendo la ampliación de la ciudadanía con base en la consolidación de nuevos derechos sociales para las clases subalternas.

en los núcleos centrales por donde corren las principales tensiones político-económicas en la actualidad. La investigación estuvo atravesada por un interrogante central: ¿cómo se configuran el modelo de acumulación post-convertibilidad y los principales factores de la construcción de hegemonía que asisten a dicho proceso? Para dar cuenta de los rasgos del modelo de acumulación y la hegemonía precisamos abordar las siguientes preguntas complementarias ligadas al desarrollo de los objetivos específicos: ¿cuáles son y cómo se desarrollan las políticas económicas con mayor incidencia en la formación del modelo?, ¿qué transformaciones y continuidades pueden observarse en las variables económicas?, ¿qué cambios en las relaciones de fuerzas entre fracciones de clase se expresan en la post-convertibilidad?, ¿cuáles son los principales rasgos del proyecto político-económico liderado por el oficialismo y de la cultura política en que se enmarca?

### **De la crisis de 2001 a la configuración de un nuevo modelo**

El modelo de acumulación post-convertibilidad tuvo su origen en un contexto de principio de crisis orgánica (Gramsci) que atravesó distintas dimensiones, expresando un genuino sacudimiento del bloque histórico que alcanzó su momento álgido en diciembre de 2001. Observamos una crisis a nivel ideológico-cultural, insinuada en la deslegitimación de algunos aspectos de la concepción del mundo neoliberal, principalmente en relación al rol del Estado y al individualismo y sus prácticas desmovilizadoras. En este sentido, comportó una crisis de la idea de Estado mínimo,<sup>5</sup> alzando demandas de mayor presencia estatal y cambio de sus funciones, junto a la proliferación de distintas experiencias de participación popular. Como crisis política conllevó, por un lado, desequilibrios en el componente institucional de representación, observable en el desgaste del bipartidismo en tanto fórmula de gestión de la gobernabilidad post-dictadura, expresando un elemento clave que Gramsci (2003) identifica en los períodos de crisis orgánica: una situación de contraste manifiesto entre «representados y representantes». Por otro lado, se afirmó una «crisis de autoridad» (Gramsci), ligada al impacto social producido por las reformas neoliberales que motivó una serie de reclamos que acarrearón un alto grado de movilización, expresando la articulación de una cadena de demandas que no pudieron ser divididas y procesadas por el orden vigente, pasando de «democráticas» a «populares» (en el sentido de Laclau, 2005).<sup>6</sup> Este proceso,

<sup>5</sup> Esta idea sostiene que el mercado es consustancial a la libertad del individuo y que la acción del Estado perturba su buen funcionamiento. Que el individuo usa los recursos mejor que el gobierno y el Estado debe interferir lo mínimo y sólo para garantizar condiciones de competencia. Así, el desarrollo económico y social llegaría inevitablemente con la economía de mercado (Matus, 2007).

<sup>6</sup> Laclau (2005) clasifica las demandas según el carácter que las mismas revistan: demandas democráticas cuando la demanda permanece aislada y demandas populares aquellas que, a través de su articulación equivalencial, comienzan a constituir potencialmente sujetos, implicando en la razón populista la conformación de un pueblo. Las demandas democráticas, por ende, pueden ser incorporadas en una formación hegemónica en expansión, mientras que las demandas populares representan un desafío a la formación hegemónica establecida como tal.

incluso, llevó a crisis las dimensiones político-jurídicas que son propias del momento de la coerción y que mostraron la incapacidad del gobierno en ejercicio de los aparatos del Estado para reprimir el conflicto creciente, derivado de la rebelión popular de diciembre. También expresó una crisis económica, debido a que el visible agotamiento del modelo de la convertibilidad (1989-2001), con caída en términos generales de la tasa de ganancia y cuatro años de recesión, evidenciaron las dificultades de las clases dominantes de hacer avanzar a la economía afectando la estructura, expresándose «por arriba» en una fractura de intereses entre distintas fracciones del capital que buscaban mejorar sus posiciones con base en diferentes propuestas de salida a aquel modelo. Además, el deterioro de los indicadores socio-económicos con incrementos incesantes en materia de desempleo, pobreza e indigencia, constituyó la base material que habilitó el creciente malestar de las clases subalternas, dando lugar a la proliferación de un amplio repertorio de acción colectiva.

La crisis del 2001 constituyó un principio de crisis orgánica, tanto por la multiplicidad de dimensiones que atravesó, como por el hecho de que la clase dirigente devino meramente dominante, lo cual se evidenció en la escalada represiva y la instauración del estado de sitio a fines de ese año. Esta crisis orgánica no alcanzó su sentido pleno, en tanto no emergió una fuerza antagonista alternativa de la subalternidad con capacidad de conformar una voluntad colectiva y fundar un nuevo bloque histórico. La heterogeneidad de las demandas y de sus portadores lograron encadenamientos suficientes como para alcanzar la delimitación provisoria del adversario, ligados en torno al significante vacío: «que se vayan todos»<sup>7</sup> que logró golpear la hegemonía vigente, pero mostró sus limitaciones para fundar un «nosotros». Así, el carácter inconcluso de la crisis orgánica se vincula al carácter igualmente inconcluso del sujeto-pueblo en formación.

En este contexto emergió el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), designado por el Parlamento tras la caída de varios presidentes en pocos días.<sup>8</sup> Duhalde se presentó como «presidente de transición» que convocaba a un gobierno de unidad para la «salvación nacional» (Duhalde, 1/1/2002). Sintetizamos su estrategia hegemónica en tres aspectos

<sup>7</sup>El «que se vayan todos» era la consigna aglutinadora, explicitada en las numerosas movilizaciones y acciones colectivas que se desplegaron entre 2001 y 2002. Esta consigna se constituyó en el significante aglutinador de las distintas demandas, cumpliendo un papel articulador a partir de la negación y de la delimitación provisoria de un adversario; un «todos» que encarnaba la otredad de forma difusa, la anti-comunidad, que abarcaba a las figuras deslegitimadas del neoliberalismo, que impugnaba especialmente a la dirigencia de los partidos políticos gobernantes asociados a la corrupción como práctica política y que podía alcanzar hasta los sectores más concentrados de la clase dominante (en la apreciación de los actores más radicalizados).

<sup>8</sup>Tras la renuncia de Fernando De la Rúa el 20 de diciembre de 2001, quedó como presidente Ramón Puerta, quien estaba al frente del Senado (ya que el vicepresidente había renunciado previamente). Puerta no logró los apoyos necesarios y renunció siendo reemplazado por Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, quien durante su semana al frente de la presidencia declaró el default de la deuda, pero que sin conseguir apoyos al interior de su partido, fue forzado a renunciar, dejando a Eduardo Camaño como presidente, siguiendo la Ley de Acefalia. Tras sólo 48 horas, llegó Eduardo Duhalde, elegido el 2 de enero de 2002, representante de la coalición productiva que promovía una salida devaluacionista al modelo de la convertibilidad.

fundamentales. En primer lugar, en relación a la dimensión ideológico-cultural de la crisis, Duhalde, que había sido uno de los intelectuales orgánicos de la salida devaluacionista, se convirtió en el primer presidente post-convertibilidad en abrazar un discurso productivista con aspiraciones fundacionales, proponiendo una nueva alianza de clase liderada por el capital productivo, que incluyera a los trabajadores, buscando diferenciarse del modelo anterior que en su discurso aparecía conducido por el capital financiero (Duhalde, 4/1/2002). Empezó a gestar una articulación duradera: caracterizó la necesidad del cambio definiendo el futuro como recuperación del imaginario peronista. En segundo lugar, respecto de la crisis política, su gobierno impulsó una estrategia dual basada en el par contención/coerción. El componente de contención se expresó en la masificación de planes sociales con el fin de paliar el estallido de la desocupación, pobreza e indigencia que alcanzaron a récords históricos. El componente coercitivo se evidenció en una ofensiva contra los movimientos sociales basada en la represión y criminalización de la protesta social. En tercer lugar, en vinculación a la crisis económica, se sancionó la Ley de Emergencia Pública n°25561, la cual contuvo el núcleo de reformas en materia político-económica que sentaron las bases del nuevo modelo de acumulación.

Así, el gobierno de Duhalde dejó varias marcas duraderas tanto a nivel del modelo como de la construcción de hegemonía. Por un lado, logró materializar la fractura del «pueblo inconcluso», con el gradual abandono de los sectores medios (los «caceroleros») del centro del escenario del conflicto, al tiempo que concentraba la represión sobre el movimiento de desocupados, en una escalada que culminó en la Masacre del Puente Pueyrredón en junio de 2002, cuyo repudio forzó el adelanto de las elecciones presidenciales. Pero, además, el 2002 duhaldista expresó el momento de máximo deterioro del tejido social, con los efectos del estallido inflacionario, mostrando un profundo efecto erosivo en materia de pobreza, indigencia y desempleo, evidenciando un fuerte sesgo regresivo en tanto descargó los costos de la transición sobre las clases subalternas. El modelo post-convertibilidad se inició, de este modo, con un carácter regresivo a través de las políticas que fundaron su propia matriz constitutiva.

En este camino, observamos que un momento clave en términos de la pregunta por el modelo de acumulación actual radica en su origen. El mismo se encuentra en la salida devaluacionista del modelo de la convertibilidad, el cual había encarnado la forma más acabada de la ofensiva del gran capital, iniciada con la instauración de un régimen de acumulación de carácter neoliberal<sup>9</sup> a partir del golpe de Estado de 1976. Así, el modelo

<sup>9</sup> Este se basó en la apertura comercial (asimétrica), una creciente desregulación y liberalización económica, la «valorización financiera», las privatizaciones, entre otras reformas estructurales, fundadas principalmente a partir de ingentes transferencias de recursos de trabajadores a capitalistas (ver Basualdo, 2003).

post-convertibilidad comenzó a configurarse a partir de seis políticas fundacionales que quebraron las regularidades del modelo anterior, dando lugar a un conjunto de transformaciones duraderas: 1) la devaluación, 2) la implementación de retenciones a las exportaciones, 3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos,<sup>10</sup> 4) el «salvataje» al capital financiero,<sup>11</sup> 5) el default, y 6) el congelamiento y renegociación de tarifas. Estas políticas, que fueron en su mayoría perfiladas a partir de la Ley de Emergencia Pública n°25561 del 6 enero de 2002 y cuya piedra angular puede encontrarse en la política cambiaria, fueron dando origen a un nuevo modelo de acumulación que presentó rupturas y continuidades vinculadas a cambios particulares en las relaciones de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios. Asimismo, notamos que la inversión pública volvió desde 2003 a constituir una intervención estatal significativa y se desarrolló a través de la conformación de grandes planes de obras públicas en materia de infraestructura (proyectos viales, energía, vivienda y desarrollo urbano).

### **Dinámica productiva, fracciones de clase y sujetos**

Un primer factor emergente de la articulación de políticas, variables económicas y fracciones de clase es la centralidad del capital productivo-exportador. La devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones<sup>12</sup> y, a través de su gravamen mediante retenciones, a la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica conllevó un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora y un fenómeno incipiente de sustitución de importaciones, producto de la protección generada por la modificación del tipo de cambio, lo que permitió también el desarrollo de las PyMEs. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real y, junto con el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los altos precios de los commodities y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. Los gobiernos desarrollaron una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y, en un contexto internacional favorable, la exportación se fue convirtiendo en una vía primordial de realización del capital, volcando

<sup>10</sup> Esta política implicó que en un sistema financiero fuertemente dolarizado (al 70% de sus depósitos y al 80% de sus créditos), los bancos debieron devolver los depósitos en dólares a \$1.40 por US\$1, mientras que los deudores con la banca local vieron pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US\$1.

<sup>11</sup> Implicó la transferencia de unos US\$24 mil millones desde Estado hacia los bancos, para compensarlos por la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y apuntalar al sector financiero.

<sup>12</sup> El peso de las exportaciones como elemento dinamizador en la realización del capital puede observarse en que (tomando los períodos 1993-2001 versus 2002-2007) son el único componente de la demanda agregada que aumenta en relación al PBI, incrementándose en 4 puntos porcentuales, mientras que el consumo privado exhibe la mayor retracción, de -3,3 puntos porcentuales. Además, la relación entre exportaciones/PBI que era del 10% en 1995 y del 12% en 2001, pasó al 25% en 2007.



las relaciones de fuerzas en beneficio de la fracción productivo-exportadora, dando origen a una nueva fase expansiva del ciclo económico.

Entendiendo que el proceso de reproducción ampliada del capital es al mismo tiempo un proceso de reproducción ampliada de las clases sociales (Poulantzas, 1981), es necesario indagar sus dos dimensiones: el lugar (Poulantzas) o posición (Gramsci) ocupado en la estructura y los agentes que ocupan dicho lugar, su reproducción y sus características. En este camino, entendemos que se fueron gestando diversas condiciones a cauda de los cambios de precios relativos, el apoyo de la política económica y el contexto internacional, que pusieron a la fracción productivo-exportadora del capital como principal beneficiaria de la Argentina post-convertibilidad y situándose en un lugar que comenzó a constituir un eje clave en el proceso de acumulación. Identificamos una fracción amplia compuesta por distintos núcleos: agentes de la industria automotriz (principalmente las terminales), las empresas de hidrocarburos, las mineras, un heterogéneo abanico de agentes vinculados a los circuitos agro-industriales, junto a empresas químicas y siderúrgicas. Son agentes caracterizados por fuertes dinámicas de concentración y extranjerización económica. Esto es visible al interior de cada núcleo: en el liderazgo de las terminales automotrices; en el sector de hidrocarburos, donde (hasta 2008) las primeras tres empresas extranjeras concentraban más del 60% de la extracción de petróleo y el 75% del gas; en el reducido grupo de mineras, canadienses y europeas, extrayendo los minerales en condiciones sumamente preferenciales; y en el triple proceso de concentración (de la tierra, el capital y la organización y gestión del proceso productivo) observable en los circuitos agro-industriales. Además muestran, en líneas generales, una participación decreciente de los asalariados en la apropiación del valor creado.

Se nos presenta una combinación de rupturas y continuidades: un nuevo énfasis en la producción de bienes, con un desempeño relevante de la industria manufacturera, que en el ciclo expansivo 2003-2007 creció anualmente en promedio por encima del PBI en su conjunto (10,3% vs 8,8% respectivamente), pero que se enmarca en una matriz productiva heredada de las previas décadas neoliberales. Es la persistencia de la reestructuración regresiva en la matriz productiva (Azpiazu y Schorr, 2010) que nos enfrenta con una Argentina que continuó siendo, en términos generales, exportadora de productos primarios y de manufacturas con escaso valor agregado, a lo que se sumó la industria terminal automotriz y algunos segmentos de la industria química y siderúrgica. Encontramos agentes cuyo lugar en el modelo se tornó clave para la percepción de divisas, otorgando un aditamento al poder estructural de esta fracción. Esto se encuadra, a su vez, en el mantenimiento de una estructura productiva desequilibrada (Diamond, 1972) con un sector primario internacionalmente competitivo, al que se fueron añadiendo, en las últimas décadas, algunos núcleos industriales de grandes empresas de alta productividad orientadas al mercado externo, pero que coexistieron con un

tejido industrial de baja productividad, implicando que un tipo de cambio real alto generara ganancias y rentas extraordinarias para los circuitos principalmente ligados a la explotación y exportación de recursos naturales, en relación al resto de los agentes económicos.

Por otra parte, el fortalecimiento de los agentes productivo-exportadores tuvo una clara incidencia en el desarrollo de un nuevo proceso inflacionario; en primer lugar, por su orientación exportadora en contextos de alza de los precios internacionales (generando un traslado de los mismos al mercado interno) y, en segundo lugar, por su alto nivel de concentración, aspecto que comenzaría a notarse al final del período de estudio con un nuevo ciclo inflacionario ligado, entre otros factores, a la puja distributiva y a la voluntad de estos agentes de no rescindir mayores márgenes de ganancia. Esto se debe a que los precios ligados a los distintos agentes y fracciones evolucionan de forma disímil en una puja que expresa las diversas capacidades de apropiación de valor y, en este sentido, se vinculan a variaciones en las relaciones de fuerza. Se constata que los precios del petróleo, los minerales, los principales cultivos y los alimentos mostraron fuertes aumentos en nuestro período de estudio. También debemos recordar que más de la mitad de las ventas al exterior correspondió a la suma de manufacturas de origen agropecuario y productos primarios que son, en general, bienes de consumo masivo de la población, lo cual repercute desfavorablemente en el nivel de inflación y en las condiciones de vida de las clases subalternas.

El dinamismo y concentración de estos agentes nos permiten pensar en una fracción productivo-exportadora del capital como núcleo dinámico del modelo post-convertibilidad, la cual tendió a presentar niveles de rentabilidad y ventas superiores al resto de las fracciones de clase, y cuyo lugar en la estructura se tornó central en el funcionamiento del modelo de acumulación. La denominación productivo-exportadora de esta fracción no refiere a que sea únicamente exportadora, sino a que, en la configuración del modelo, el impulso que ha cobrado esta orientación al mercado externo permitió alcanzar un considerable superávit comercial que, aunado al superávit fiscal favorecido mediante retenciones a las exportaciones, configuró los dos pilares de estabilidad del modelo.<sup>13</sup>

En este camino, el modelo comenzó a cobrar rasgos productivos que implicaron una importante reactivación de la producción manufacturera y del empleo industrial, estableciendo una ruptura con el proceso de desindustrialización previo. Las PyMEs comenzaron a cumplir un rol dinámico en ese sentido y el modelo habilitó una mejora general de los indicadores ligados a esta fracción, con una rentabilidad que se triplica respecto de los años 90, en un contexto de precios relativos favorables; sin embargo, asimismo su posición es crecientemente

<sup>13</sup> Si bien el superávit comercial se sostuvo, con algunas variaciones, durante toda la etapa hasta 2015, el superávit fiscal comenzó a deteriorarse y, ya desde 2011, se tornó deficitario, constituyendo una vía clave para la crisis del modelo.

subordinada en tanto se amplía la brecha de ganancias respecto de las grandes empresas (Kulfas, 2011). La creación de nuevas PyMEs ha sido clave en el descenso de la desocupación, pero el tipo de empleo que generan es cualitativamente inferior al de las grandes empresas, pues se caracteriza por altas tasas de informalidad (60%)<sup>14</sup> y salarios un 48% más bajos,<sup>15</sup> enmarcados en una débil evolución de la productividad laboral.

En este punto se estableció una contradicción nodal al interior de las clases dominantes, la cual funcionó como limitante de mediano plazo para habilitar la gestación de consensos en una estrategia tipo pacto populista. Si, por un lado, encontramos PyMEs que fueron clave en la generación de empleo, pero de tipo precario y con bajos salarios, por otro lado, observamos un conjunto de grandes empresas que no se caracterizaron por la generación masiva de empleo, pero sí por mayores niveles de formalidad y mejores salarios. Un factor a tener en cuenta es la creciente extranjerización de las grandes empresas; esta puede percibirse en que, entre las 500 empresas más grandes, aquellas con más del 50% de participación extranjera pasaron de apropiarse el 35% de las utilidades totales en 1993 al 90% en 2005. Además,

Si bien prácticamente un tercio de las empresas son de capital de origen nacional, dicha relación no se mantiene cuando se analizan los agregados macroeconómicos. Para el año 2007, el 81,7 % del valor bruto de producción del total del panel y el 83,8 % del valor agregado del mismo, son generados por empresas con participación de capital extranjero (INDEC, 2009:11).

Aquí reaparece un debate recurrente en la historia argentina: la pregunta por la burguesía nacional, que es también la pregunta por las potenciales «alianzas» entre fracciones de la clase dominante y las clases subalternas (o al menos la posibilidad estructural y los límites de complementación de intereses y de concesiones), y la conformación de un desarrollo nacional soberano.<sup>16</sup> Si bien dentro del gran capital existen algunas importantes empresas de origen local, su propia lógica transnacionalizada y el predominio general del capital extranjero parecen cuestionar esta perspectiva. Las características mismas del capital productivo-exportador parecen quitar bases materiales sólidas a este punto de vista: tanto su concentración y extranjerización, su lógica exportadora y el lugar ocupado por el trabajo en su interior, cuestionan la idea de una potencial alianza poli-clasista como fuera propuesta entre las décadas del 40 y 70. Esto se relaciona con que la orientación exportadora del gran capital, lejos de ver en el salario un factor fundamental (como consumo en el mercado

<sup>14</sup> Dato presentado por Kulfas (2011) para el año 2007, sosteniendo que en dicho año el conjunto de las micros, pequeñas y medianas empresas sólo tenían el 40% de sus trabajadores registrados.

<sup>15</sup> Dato provisto por Fal et al. (2009), para el año 2007.

<sup>16</sup> Poulantzas (1981) refiere a la burguesía nacional como una fracción autóctona de la burguesía que, a partir de determinado grado de contradicciones con el capital imperialista extranjero, podría jugar un rol relativamente autónomo.

interno) para la realización del capital, encuentra en él un costo que busca ser limitado para ganar rentabilidad. Esto es porque una de las claves de la competitividad internacional y de las ganancias empresariales se halla en que, en un contexto de aumento de la productividad laboral, la limitada evolución del salario real (particularmente al inicio del modelo post-convertibilidad) suscitó una reducción del costo laboral: salarios que, aunque más altos que los provistos por las PyMEs, eran bajos en relación al producto generado.

Hay un corte aquí en términos de productividad: las grandes empresas proveían salarios mejores en pesos que no constreñían sus altísimas ganancias, ya que la inversión y el reordenamiento del proceso productivo generaban un aumento de la productividad que devino en plusvalía relativa y que no derivó en equivalentes aumentos de la participación asalariada, sino en la apropiación privada de la misma.<sup>17</sup> Ahora bien, estos salarios «relativamente altos» en pesos eran salarios baratos en términos de divisas, base de competitividad internacional, de modo que no había complementariedad con intereses subalternos (en términos de mejoras de condiciones de vida mutuamente beneficiosas). Del otro lado del corte por productividad se encontraban las PyMEs. Ellas sí estaban orientadas al mercado interno, como proveedoras de bienes intermedios y de consumo, y podían verse beneficiadas de un mayor poder de compra de los trabajadores. Sin embargo, la baja productividad ponía a los bajos salarios como condición de la rentabilidad y subsistencia de esta fracción, tan importante en términos de generación de puestos de trabajo (factor que explicaba las magras condiciones cualitativas de estos empleos). Así, otra fracción que podía encarnar potencialmente a la burguesía nacional, ya que incluso se encontraba menos extranjerizada que las otras fracciones dominantes, se alejaba de la pretensión invocada en los discursos. Nuevamente desaparecía la complementariedad posible de intereses.<sup>18</sup>

La simiente de la pregunta por la burguesía nacional, nos interroga por la constitución de sujetos dominantes y su capacidad (o no) de conducir procesos de desarrollos relativamente soberanos con articulación a las clases subalternas. Ante la ausencia material de un sujeto tipo burguesía nacional, los refuerzos de armonización de intereses recayeron mayormente sobre el Estado, dejándonos, a su vez, el interrogante por la construcción del sujeto popular. En este camino, una pregunta emerge de la investigación concreta y se expande sobre toda una época: es la pregunta por la construcción de sujetos dirigentes del proceso histórico en contextos de fragmentación social.

<sup>17</sup> Análisis detallados de la evolución del salario y la productividad pueden encontrarse en: Graña y Kennedy (2007) y Basualdo (2008).

<sup>18</sup> Tampoco pareció alcanzar la constitución de un núcleo de empresarios cercanos al oficialismo ni en la consolidación de ámbitos privilegiados de acumulación, en donde los mismos estaban involucrados (Castellani, 2010) para suplantarlo a este sujeto clave, en el pasado, de la alianza policlasista.

Para dar cuenta del aspecto general de la pregunta, debemos ver el punto donde se anudan las dimensiones de hegemonía y acumulación. Indagar complementariedades (existentes o potenciales) se vincula, por un lado, a la posibilidad de construcción de toda política hegemónica: esta se define por su capacidad de rescindir intereses económico-corporativos inmediatos para garantizar los estratégicos, otorgando concesiones, en un proceso que abarca la universalización de intereses y concepciones del mundo, en tanto la realización de la dirección de una fracción o bloque singular aparece como el desarrollo más pleno de todas las «energías» nacionales (Gramsci, 2003). Pero, por otro lado, hay una relevancia específica en nuestro caso: la re-emergencia de proyectos políticos-económicos de gobierno basados en la gestación del pacto populista. Esta doble cualidad motiva una doble lectura del populismo: el populismo como lógica político-hegemónica de articulación de demandas y construcción de sujetos en el antagonismo,<sup>19</sup> y el populismo como pacto que busca articular intereses de clases dominantes y subalternas. Ahora bien, previamente marcamos que los agentes dominantes, definidos por sus rasgos específicos y lugares ocupados en la estructura, mostraban deficiencias en la generación de complementariedades con los agentes subalternos. Y entonces, ¿cómo es posible que fuera un proyecto basado en el pacto populista el que lograra constituir una fuerza hegemónica?

### **El surgimiento del kirchnerismo: proyecto, hegemonía y políticas**

Teniendo como antecedentes, primero el punto de inflexión establecido por la crisis del 2001 y luego por el gobierno de Duhalde, el escenario en materia de hegemonía comenzó a cambiar a partir de 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, quien emergiendo como el presidente menos votado de la historia argentina, procuró dar resolución a un conjunto de demandas planteadas por diversos actores de las clases subalternas, al tiempo que impulsaba la recomposición de la economía. En este camino, se avanzó con cambios en la cuestionada Corte Suprema de Justicia, el descabezamiento de la cúpula militar, un profundo cambio en la política de Derechos Humanos, nuevas perspectivas de integración latinoamericana con su momento fundamental de rechazo al ALCA en 2005, nuevas políticas de ingresos orientadas a las clases subalternas, entre otras medidas progresivas. Si bien se sostuvieron algunas líneas que ya aparecían en el discurso de Duhalde, como la propuesta productivista y la definición del futuro como retorno a la Argentina peronista (ya que ambos pertenecían a esa misma tradición y partido), en cambio, el contenido y la lectura de las que parte,

<sup>19</sup> Según Laclau, el antagonismo ocupa un lugar central en la hegemonía como lógica política, así como en su especificidad en la razón populista, ya que se parte de dos precondiciones: 1) la formación de una frontera interna, que en la razón populista separa al pueblo del poder, y 2) una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento de sujetos políticos, del pueblo, en la lógica populista. En este camino, la construcción de hegemonía aparece definida, desde esta perspectiva, como un particular que ocupa el lugar de un universal.

sugieren la conformación de un proyecto distinto. Así, la hegemonía kirchnerista comenzó a versionar su concepción del mundo «planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha» (Gramsci), ya que emergió de cara a los factores persistentes de la crisis de 2001; afrontó sus distintas dimensiones y se planteó a sí mismo como momento de sutura y superación.

En este sentido, identificamos tres elementos fundamentales del kirchnerismo como cultura política: la construcción del neoliberalismo como adversario en el discurso; la recuperación del Estado como mediación, con un rol destacado en el proceso de «armonización» de intereses; y la recomposición de niveles de vida de las clases subalternas que permitió instituir la promesa de plenitud al proyecto. Así, el kirchnerismo afrontó la crisis ideológico-cultural incorporando a su discurso diversas demandas expresadas durante la crisis dándoles distintos grados de respuesta, en un doble movimiento que procuró comenzar a suturar también aspectos de la crisis política. En dicha dimensión, buscó recomponer el vínculo entre «representados y representantes», reformulando el desgastado bipartidismo en dos nuevos polos de centro-izquierda y centro-derecha, ocupando el kirchnerismo el primero. A su vez, la estrategia de construcción de su fuerza política contuvo dos tácticas articuladas: la de la transversalidad, teniendo un rol fundamental para la incorporación de demandas y de parte de sus portadores a una nueva cadena equivalencial, y la concertación, que refirió a la alianza con sectores de otros partidos tradicionales, aprovechando ambas tácticas para la reconquista y aumento de la gravitación del Partido Justicialista.

De este modo, se comenzó a constituir una cadena que se singularizó en el líder, procurando la construcción de una voluntad colectiva: el kirchnerismo comenzaba a transitar el camino de un Príncipe moderno gestando transformaciones tanto a nivel de la estructura económica como del propio Estado. Pero este proceso se realizó centralmente desde el Estado. El campo de antagonismo definió el trayecto de conformación identitaria del sujeto, en el que el kirchnerismo construyó a un amplio abanico de figuras vinculadas al neoliberalismo como adversario,<sup>20</sup> responsable de la fractura de la promesa de plenitud que él mismo procuraba restaurar, favoreciendo así su asociación con la impugnación generalizada del «que se vayan todos» (Muñoz y Retamozo, 2008). En este sentido, el kirchnerismo se propuso como lo «nuevo» que clausuraba a lo «viejo» y presentó al Estado como instancia reparadora del pueblo dañado, comenzando a gestar un «nosotros» nacional-popular en el que reformulaba la identidad peronista, y la extendía a otros actores políticos, dando

<sup>20</sup> Por ejemplo, en el 79° Aniversario de la Cámara Argentina de Comercio, Kirchner sostuvo: «No puede ser el norte de ninguna sociedad la convivencia con la miseria, la marginalidad, la exclusión y la inequidad a que ha dado lugar la aplicación del pensamiento único y el señoreo del pensamiento neoliberal que caracterizó la economía mundial y la propia en el último decenio» (11/12/2003). Así, ejerció fuertes críticas a los actores que impulsaron localmente las reformas neoliberales y a sus promotores, como el FMI, a nivel internacional.

forma al proyecto de gobierno. Emulando al peronismo originario, con su ampliación de la ciudadanía y la conquista de derechos para las clases subalternas, procuró performar la promesa de plenitud.

Toda promesa de plenitud se encuentra ligada a un proyecto de gobierno, que consigna las tareas que permitirían transitar del momento de crisis a la sutura, en una particular lectura del pasado y una proyección del futuro. Si la matriz ideológica partía de una concepción de nacionalismo popular, en referencia al modelo de acumulación, Kirchner sostuvo al asumir como Presidente: «En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente» (25/5/2003). Pensaba un Estado que ampliara su autonomía relativa recuperando su capacidad mediadora y reguladora, con mayores atributos en la gestión del excedente para volver a la senda del desarrollo con inclusión social. En sus discursos pueden recopilarse el conjunto de factores político-económicos que van dando forma al proyecto de gobierno, el cual incluye desde el perfil industrialista, la preocupación por el doble superávit, la integración latinoamericana hasta la política de DDHH. De esa forma, continuó la propuesta de cambio de alianza entre el Estado y las fracciones de clase, manteniendo la centralidad de la burguesía nacional, aunque se la comenzó a ver como un actor que no estaba plenamente constituido sino que debía ser apuntalado; mientras, fue alcanzando mayor jerarquía el lugar del trabajo.

Así, fue cobrando forma concreta la doble lectura del populismo: a) como lógica política, se conformó un otro-poder, identificando a su adversario en torno al neoliberalismo, cuyo centro de acción parte desde el Estado mismo, presentado como emanación de la voluntad popular para reparar al propio pueblo dañado; y b) como pacto populista, se dio una vasta estrategia de conciliación de clases a través de la ampliación de la autonomía relativa del Estado, impulsando una nueva alianza estratégica tripartita entre Estado, trabajadores y agentes del capital productivo que pudieran encarnar el rol de la burguesía nacional, desplegando un sistema de transferencia de recursos para armonizar los compromisos inestables entre las fracciones de clase. Es por esto que entendemos que el kirchnerismo expresa una construcción ambivalente: aparece como un proyecto de normalización política y económica suturando la crisis de modo progresivo, cobrando forma conflictivamente, articulando un discurso que constituía sus propios antagonistas y abría juego a componentes rupturistas. El kirchnerismo, sin procurar una transformación clasista del orden, avanzó a recomponer la promesa de plenitud, reconstituyendo las condiciones de empleo e ingresos de las clases subalternas en el marco del proyecto de «capitalismo serio o nacional». Pero contenía asimismo un elemento «herético», que proliferaba en tanto la dimensión del conflicto aparecía presente en el modo en que eran desplegadas las políticas, con la recuperación del espacio público como ámbito de disputa desde la acción estatal, la reivindicación de la política como

herramienta de cambio, y en el ser parte de los gobiernos que en América Latina comenzaron, con distintos grados de profundidad, a enfrentar el régimen neoliberal. Así, la función del conflicto como productor de orden (Cremonte, 2007) y la limitación de este a un horizonte sistémico en el proyecto de capitalismo nacional, imprimió una tensión perdurable entre los dos componentes que marcaron la cultura política de este Príncipe moderno fundado en el pacto populista: el componente sistémico y el herético —que James (2006) observara en el peronismo clásico— permanecieron en un «tira y afloje», articulándose e imponiéndose alternativamente. Son las tensiones propias de una fuerza que tiende a expresar una versión hegemónica del capitalismo argentino al mismo tiempo que representa «el hecho maldito del país burgués» (evocando a Cooke, 2010), cuyos componentes populares no pueden dejar de ser vistos como amenazantes por la clase dominante.<sup>21</sup>

La progresividad y alcance de sus medidas variaron en esta tensión. En materia de política de ingresos, identificamos un conjunto de acciones estatales que, en esta primera parte de la etapa post-convertibilidad, tendieron a apuntalar los ingresos básicos de las clases subalternas y aumentar los salarios, de modo más significativo en los sectores más dinámicos de la economía. Entre estas acciones destacamos cuatro principales: a) aumentos anuales del salario mínimo, importantes en términos reales; b) impulso a los acuerdos y convenios colectivos de trabajo, centrados en la industria, superando en 2007 la cuadruplicación del promedio de la década anterior; c) aumento y extensión de la jubilación mínima, alcanzando prácticamente su universalización; y d) acuerdos de precios para limitar la inflación. Estos mecanismos tuvieron impactos diversos. En primer lugar, mostraron un efecto positivo, mejorando todos los indicadores sociales desde el momento de su implementación con particular incidencia en la reducción de la pobreza y la indigencia, descendiendo entre 2002 y 2007 del 57,5% al 21% y del 27,5% al 7,5%, respectivamente, en un contexto de fuerte descenso de la desocupación del 23,5% al 7,2% y de la desigualdad, visible en que el coeficiente Gini pasó del 0,537 en 2003 al 0,485 en 2006.<sup>22</sup> Sin embargo, el impacto de estas medidas sobre las clases subalternas constituyó también un efecto dispar en términos particulares, en tanto se observa en ellas una creciente heterogeneización, evidenciada en el incremento de la fragmentación salarial correspondiente a los distintos tipos de categorías laborales (entre formales e informales, bajo convenio colectivo o sin él, entre el sector privado y el público, y dentro del público entre sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional, etc.). Por un lado, los trabajadores del sector privado, registrados y generalmente bajo convenio colectivo, consiguieron, hacia 2007, aumentos bastante superiores al índice inflacionario, mientras que los trabajadores informales y estatales obtuvieron, en distinta medida, ingresos reales por debajo de los percibidos en 2001. Esto, a su vez, se conjugó con

<sup>21</sup> Para un análisis detallado de la construcción de la hegemonía kirchnerista ver Varesi (2014).

<sup>22</sup> Datos provistos por el INDEC y el Ministerio de Economía.



un efecto limitado en lo general, ya que si bien los salarios reales comenzaron a recuperarse desde 2003, la distribución funcional del ingreso y el salario real promedio quedaron en 2007 aún por debajo de los de 2001 (recién superados en algunos puntos durante el gobierno de Cristina Fernández). Esto muestra políticas que si bien mejoraron los «pisos» de ingresos, no lograron mover de forma sustancial el «techo» distributivo,<sup>23</sup> determinado por la voluntad del capital de no ceder márgenes de ganancia.

### **Modelo de acumulación y fracciones de clase**

Para poder comprender más cabalmente el enlace entre el proyecto político-económico, componente clave de la construcción de hegemonía, y el modelo de acumulación, debemos completar el cuadro de análisis de clases, abordando las fracciones de clase que, habiendo alcanzado centralidad en los años 90, fueron desfavorecidas en sus relaciones de fuerza al interior de la clase dominante.

La devaluación y la política de tipo de cambio real competitivo que la siguió establecieron cambios en los precios relativos: los bajos salarios y la caída de las tarifas de servicios públicos y de la tasa de interés real. El fin de la convertibilidad perjudicó las posiciones relativas de la mayoría de las empresas de servicios, con su núcleo destacado de privatizadas. Con respecto a ellas, en 2002 se habían establecido herramientas legales que motivaron el congelamiento y renegociación de tarifas.<sup>24</sup> Durante el gobierno de Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, reestatización y creación empresarial. Esta estrategia persiguió tres objetivos: 1) dismantlar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevaban adelante en el CIADI; 2) evitar un «tarifazo», para limitar la inflación y mantener el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas. Las renegociaciones tendieron a presentar aumentos, dirigidos principalmente a los grandes consumidores, procurando evitar el impacto directo sobre los sectores populares e impulsando el nuevo esquema de precios relativos. Si bien en todos los casos el acuerdo implicó el retiro de las demandas del CIADI, a las privatizadas no se les exigieron las inversiones anteriormente incumplidas. Las reestatizaciones fueron realizadas por fuera de las figuras legales para empresas estatales, formándose sociedades anónimas, con mayoría

<sup>23</sup> Basualdo (2011) señala que la participación de los asalariados sobre los ingresos totales era en 2001 del 34%, según su propia medición, y del 39% según CIFRA; ésta se deterioró entre el fin de la convertibilidad y el comienzo del nuevo modelo, quedando en 2003 en 25% y 31%, según respectivas mediciones, y se fue recuperando hasta llegar en 2010 al 38% y 40%, respectivamente. De este modo, recién en 2010 la participación asalariada se ubicó entre 4 y 1 puntos porcentuales por encima del último año del modelo de la convertibilidad.

<sup>24</sup> Durante el gobierno de Duhalde se desplegó una estrategia dual, por un lado, beneficiando a las empresas ubicadas en áreas no sensibles al consumo popular y, por otro, dilatando las negociaciones en todas las áreas sensibles para dejarlas al gobierno siguiente (Azpiazu y Schorr, 2003).

accionaria estatal, bajo la Ley n° 19.550 que regula y tipifica las sociedades comerciales. Ejemplos de esto fueron el Correo Argentino, Aysa, el espacio radioeléctrico, entre otras, y hubo reestatizaciones parciales como Aeropuertos y el Ferrocarril San Martín. Esta acción estatal establece una ruptura con el régimen neoliberal que contenía un perfil claramente privatizador. La tercera variante fue la creación empresarial por parte del Estado, como el caso de Enarsa, creada como parte de la política energética del gobierno para incidir en esa área clave. Así, las privatizadas comenzaron a ocupar una posición subordinada respecto de la década del 90, época en que presentaban las rentabilidades más elevadas de la estructura económica en su conjunto.<sup>25</sup> En el modelo post-convertibilidad, las empresas de servicios volvieron paulatinamente a estar sujetas a las prioridades del capital productivo y la acción estatal procuró además establecer tarifas diferenciadas, con el fin de preservar las condiciones de vida de las clases subalternas. Esto puede verse también en que las empresas de servicios privatizadas perdieron posiciones al interior de la cúpula empresarial.<sup>26</sup>

Asimismo, se desplegó una política de subsidios compensatorios que representaron mecanismos de transferencia de recursos, donde el Estado procuró recomponer el equilibrio de compromisos inestables al interior de la clase dominante. Esta acción complementó otras anteriores, como la pesificación asimétrica de deudas y depósitos implementada por el gobierno de Duhalde; política que, cuando el lobby empresarial logró forzar a derogar el techo impuesto inicialmente en US\$100.000 para la pesificación de deudas, se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del capital productivo y de las privatizadas con la banca local.

El análisis de la fracción financiera del capital nos requiere hacer un breve retroceso cronológico y retornar a algunas políticas que precedieron al kirchnerismo, ya que las mismas tuvieron impactos destacados durante todo el período. El gobierno de Duhalde había dispuesto un plan de «salvataje» al capital financiero, que dio lugar a transferencias destinadas a compensar a dicha fracción por las consecuencias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica y a apuntalar al sistema financiero, derivando unos US\$24.000 millones, que en su mayor parte constituyeron bonos de nueva deuda pública.<sup>27</sup> Las políticas

<sup>25</sup> Esto puede verse en el conjunto de indicadores presentados por Ortiz y Schorr (2007).

<sup>26</sup> La cúpula empresarial refiere a las principales empresas que operan en el país. En nuestro caso, observamos el cambio en la composición de la cúpula atendiendo a los datos presentados por la ENGE (Encuesta Nacional de Grandes Empresas) que toma a las principales 500 empresas no financieras ni agropecuarias del país, y permite observar a la cúpula de las primeras 200. Otra fuente utilizada para ver los movimientos entre las principales empresas es el registro anual de la Revista Mercado, tomando en cuenta su facturación. Finalmente, también encontramos un conjunto de bibliografía especializada en el análisis de la cúpula empresarial, como Lozano et al. (2007); Ortiz y Schorr (2007) y Santarcángelo y Perrone (2012), entre otros.

<sup>27</sup> El «salvataje» al capital financiero cobró forma a partir de operaciones de diverso tipo destinadas a compensar a la fracción financiera del capital por las implicancias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que fueron cubiertas en un primer momento con la emisión de nueva deuda pública por un monto total de US\$ 14.386 millones, constituyendo el 51% de la deuda pública post-default. Este monto de endeudamiento se explicó por la emisión de: US\$ 5.900 millones de compensaciones por la pesificación asimétrica; US\$ 2.400 millones en «bonos cobertura» con arreglo al impacto generado por la devaluación; y US\$ 6.086 millones en bonos para canjear por los

vinculadas a la deuda pública tuvieron un claro impacto en las relaciones de clase, en tanto una parte considerable de los bonos en default (establecido a fines de 2001) estaban en poder de los conglomerados financieros. La salida del default, concretada por el gobierno de Kirchner con el canje de 2005, presentó una importante quita del 43.4% sobre el total canjeado.<sup>28</sup> Aparecieron en el canje componentes novedosos como las Unidades Ligadas al PBI, cupones que, en las condiciones de crecimiento económico vigentes, produjeron ganancias que se multiplicaron año tras año. Otro elemento relevante es que más del 40% de la deuda se encontró pesificada e indexada a la inflación, aspecto que fue cobrando cada vez más relevancia. Aún con la importante quita del canje, quedó un calendario de pagos con exigentes desembolsos anuales (entre 10 y 20 mil millones de dólares).<sup>29</sup> El canje eliminó del corto plazo el panorama de crisis de la deuda, pero siguió implicando un importante drenaje de recursos que recayó, principalmente, sobre las clases subalternas en virtud de la regresividad que permaneció en la estructura tributaria. Además, tuvo lugar un hito clave para la ampliación de la autonomía relativa estatal, coherente con el carácter nacional-popular del proyecto: Kirchner rompió el tratado que el gobierno duhaldista había firmado con el FMI, el cual exigía aumento de tarifas y mayores tasas para el canje de deuda, llevando al pago por adelantado del pasivo con esta entidad y poniendo fin a los monitoreos y exigencias de políticas que el Fondo imponía.

Además, la fracción financiera del capital comenzó a ocupar una función parcialmente distinta a la característica de los años 90. El descenso de la tasa de interés real y el hecho de que la rentabilidad bancaria no estuviera dada por los resultados de las tasas de interés, sino por la simple tenencia de bonos y servicios (Sevares, 2010), implicó (más aún con la caída de la convertibilidad de la moneda, que operaba como seguro de cambio gratuito): un freno al proceso de «valorización financiera»<sup>30</sup> y su circuito ligado al endeudamiento externo; derivación improductiva de recursos de grandes empresas al sistema financiero, procurando

depósitos reprogramados (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005). Por otra parte, el Estado nacional apuntaló el sistema financiero absorbiendo las deudas que los Estados provinciales mantenían con los bancos, involucrando recursos por US\$ 9.679 millones. De este modo, el Estado nacional movilizó unos US\$ 24.065 millones en diversas operaciones destinadas a recomponer el sistema financiero, ya sea como transferencia directa hacia el capital financiero, asumiendo o no los bancos obligaciones con el Estado, o de forma indirecta, asumiendo los pasivos de los Estados provinciales con los bancos.

<sup>28</sup> El cálculo se realiza tomando en cuenta las reducciones presentadas por el total de los nuevos bonos y su valor resultante sobre el total en default que ingresó al canje, con base en datos presentados por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Del total de los US\$ 81.800 millones que entraron en default en 2001, el canje fue aceptado en un 76,15%, de modo que US\$ 62.300 millones fueron cambiados por los nuevos títulos elegibles. Finalizado el canje, estos US\$ 62.300 millones se redujeron a US\$ 35.300 millones, representando una quita del 43,4%.

<sup>29</sup> Según datos presentados por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

<sup>30</sup> Tomamos el concepto de valorización financiera de Basualdo (2003). La valorización financiera refiere a un proceso donde las tasas más altas de rentabilidad se desplazan desde el sector industrial al financiero, a partir de distintas dinámicas ligadas a reformas estructurales de liberalización y a prácticas especulativas de los grupos económicos. Así, la principal dinámica que la caracterizó en la historia argentina se basa en que distintos agentes del capital concentrado contraían deuda a bajas tasas en el exterior, las volcaban en el mercado financiero local, que

aprovechar el diferencial positivo entre las tasas de interés internas y externas; posterior fuga de capitales; y deterioro de las cuentas externas y públicas. De este modo, el capital financiero dejó de cumplir este papel articulador a nivel del modelo de acumulación y, aunque siguió cumpliendo un rol importante en el proceso de endeudamiento público, los descensos de la relación deuda/PBI, deuda/exportaciones y deuda/reservas en un contexto de solidez de las cuentas públicas asentado en el doble superávit (fiscal y comercial), constituyeron un panorama distinto, manejable, al menos, en el corto y mediano plazo.

Una acción estatal importante, referida al capital financiero, fue la estatización de las AFJP,<sup>31</sup> realizada a fines de 2008 por el gobierno de Cristina Fernández. De esa forma, se retrajo una reforma estructural de corte neoliberal, recuperando recursos y capacidad de decisión para el Estado. Aun así, debe notarse que esto no afectó de modo sustancial la rentabilidad bancaria que, en alza desde 2005, para la época de la reestatización del sistema jubilatorio ya superaba el promedio de los años 90.

Asimismo, debemos notar que el capital financiero local prosiguió un camino de creciente concentración pero, a diferencia de las otras fracciones del capital concentrado, exhibió una merma en su extranjerización, ya que la banca extranjera redujo su participación en los depósitos del 56% al 38% y la banca privada nacional logró llevarla del 15% al 32% (Cobe, 2009). Por otra parte, se observa la persistencia de limitaciones ligadas a la vigencia de la legislación financiera proveniente de la última dictadura y a la escasa articulación de la banca privada con la fracción de PyMEs, lo cual representó un problema para el modelo, restando una complementariedad necesaria que hace que las inversiones tendieran a ser financiadas a través de la propia ganancia inmediata.

### **Nuevo modelo, nuevo régimen**

Una pregunta central que atravesó nuestra investigación se asentó en cómo denominar al modelo de acumulación, ya que, siendo extendido el uso de modelo «post-convertibilidad», no podemos dejar de notar que esta designación remite al modelo anterior, refiriendo a la ruptura establecida a nivel del tipo de cambio. ¿Cómo nombrar entonces al modelo a partir de sus características propias? La relevancia de la política de tipo de cambio real competitivo y la excepcional coyuntura de precios de los commodities; el bajo salario en

tenía altas tasas de interés, valorizaban ese capital en el diferencial entre la tasa interna y externa, luego fugaban los activos y volvían a empezar el ciclo. Los capitales fugados eran entonces mayores que los que ingresaban, generando crisis en el sector externo que era cubierta mediante endeudamiento público. El Estado financiaba este circuito que favorecía al gran capital (industrial y financiero) y terminó finalmente estatizando la deuda externa privada, generando una transferencia masiva de ingresos hacia estos grupos.

<sup>31</sup> Las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones surgieron de la privatización del sistema jubilatorio en los años 90 y representaron un gran negocio para los conglomerados financieros, implicando un fuerte déficit al fisco que debía seguir pagando jubilaciones sin recibir los recursos necesarios para hacerlo.

divisas; la caída del costo laboral en relación al aumento de la productividad; el segmento de ganancia empresarial que se realiza en el mercado externo, basado principalmente en la extracción y procesamiento de recursos naturales y en la industria automotriz; la vitalidad de las exportaciones como componente de la demanda agregada en relación a la década previa; entre otras, constituyen factores dinámicos que habilitaron la consecución inédita de sucesivos superávits comerciales. Estos, junto a la política de retenciones y al aumento de la recaudación tributaria en general, dieron lugar a superávits fiscales, que constituyeron los dos pilares de sustentabilidad del modelo, extendiéndose durante toda esta primer fase de su configuración y posibilitando el despliegue del sistema de transferencia de recursos. Estos elementos, en relación a los factores de análisis que nos llevaron a definir la centralidad del capital productivo-exportador y el perfil productivista que comenzó a revertir la desindustrialización previa, nos proveen algunas pautas para concluir en la denominación del modelo de acumulación post-convertibilidad como modelo productivo-exportador.

A su vez, estas transformaciones nos convocan a pensar que el establecimiento de este nuevo modelo pareciera ser parte de la inauguración de un nuevo régimen de acumulación, que podríamos denominar como neo-desarrollista. Esto se debe al nuevo énfasis en la producción de bienes, que tuvo un impacto positivo sobre el empleo, incluyendo un novedoso aumento de la ocupación industrial —con fuerte incremento de la inversión pública dirigida a acondicionar el proceso productivo y realizar obras de infraestructura—, recordando un talante desarrollista, y fomentando, además, la inversión externa, pero orientada principalmente hacia la producción de bienes transables. Se establecieron políticas de ingresos favorables a las clases subalternas desde 2003 (tras décadas de políticas regresivas); se cortó el proceso privatizador con reversión parcial, mediante reestatizaciones; aumentó la regulación estatal sobre la economía; entre otros factores que expresaron un cambio en la orientación de la intervención estatal cuya matriz ideológica se distanció de los cánones propios del paradigma neoliberal, en relación a la cultura política de la fuerza hegemónica. El neo-desarrollismo aparecería, entonces, caracterizado como un régimen de acumulación que, sin pretender producir una ruptura explícita con todas las reformas neoliberales, sí exhibe algunas transformaciones estructurales y, sobre todo, fuertes cambios de acento y nuevos énfasis tanto en materia social como en políticas de producción y empleo, confiando en las posibilidades del capitalismo productivo y nacional, incluyendo incentivos a la inversión extranjera y priorizando la integración regional. Este régimen evidenció una creciente intervención estatal, mostrando mayores niveles de autonomía relativa, que gestó a su vez un sistema de transferencias de recursos con el fin de compensar los equilibrios inestables entre las fracciones de clase, al tiempo que avanzó a mejorar la vida de las clases subalternas, aunque sin llegar a alterar de forma fundamental la distribución funcional del ingreso.

El análisis del sistema de transferencia de recursos requiere también de una aproximación a la estructura impositiva, a fin de ver la distribución de las cargas aplicadas para obtener los fondos que permitieron su existencia. En esta área, la acción estatal no mostró avances muy significativos. En 2007, el IVA, impuesto de naturaleza regresiva, explicó más del 31% de la recaudación. Fue seguido por el Impuesto a las Ganancias, que tendía a afectar a sectores laborales por el incremento de la cantidad de trabajadores en relación de dependencia y al aumento real de salarios (CIFRA, 2012), al que se le fue añadiendo luego una demora en la actualización del mínimo no imponible.

La reimplantación de las retenciones, principal insumo de los derechos al comercio exterior que representaron cerca del 14% de la recaudación, marcó una novedad. Por un lado, buscó desdoblarse los precios del mercado externo e interno, procurando limitar la inflación que afecta principalmente a las clases subalternas. Por otro lado, se gravó a la fracción más dinámica del capital (productivo-exportadora), para derivar recursos a otras fracciones dominantes y subalternas, intentando construir gobernabilidad a partir de la compensación de distintos intereses. Por una parte, las retenciones, limitando el proceso inflacionario, acompañaron a las medidas de apuntalamiento de salarios y jubilaciones; por la otra, las retenciones incrementaron el superávit primario que era destinado en parte al capital financiero, vía pago de deuda (acompañando otras acciones como las compensaciones a los bancos) o a transferencias a las privatizadas vía subsidios.

También debemos señalar que las retenciones comenzaron a constituir un factor de creciente diferenciación al interior de la fracción productivo-exportadora, entre quienes estaban afectados por ellas y quienes quedaban exentos, y muchas veces eran beneficiarios de otras transferencias como subsidios industriales o beneficios impositivos. Para el caso de los agentes de los circuitos agroindustriales, esta diferenciación no sólo se estableció en virtud de dicha acción estatal, sino que estaba ligada de modo singular con un conjunto de procesos estructurales y superestructurales que confluyeron para gestar un nuevo antagonismo, reabriendo una crisis de hegemonía; ello estableció al año 2008 como punto de inflexión, también en términos de acumulación, al interior del régimen neo-desarrollista.

### **El conflicto agrario de 2008 como nuevo punto de inflexión**

Los procesos de «revolución verde» y agriculturización introdujeron cambios técnicos en el largo plazo que ejercieron modificaciones en los procesos de trabajo, generando un impulso a la conformación del agronegocio. Este, a partir de la aplicación del «paquete tecnológico» (semillas genéticamente modificadas, agroquímicos y siembra directa), se consolidó en el corto plazo con el nuevo modelo y el contexto internacional. Los agentes de los principales circuitos agroindustriales se articularon en la lógica productivo-exportadora, conteniendo distintos núcleos que incluyen desde los productores de insumos y maquinaria, pasando por

las figuras de rentistas, contratistas y productores, las empresas financiero-agropecuarias y los pools de siembra, los agentes del acopio, la producción industrial y la comercialización exterior.

Percibimos la presencia de un triple proceso de concentración: a) concentración estructural de la tierra de largo plazo, donde solo el 4,2% de las explotaciones agropecuarias (que poseen más de 2500 Ha) abarcaban el 62,8% de las Ha totales, con la desaparición del 21% de las explotaciones agropecuarias en el periodo inter-censal 1988-2002 y un incremento del 25% de la superficie media de cada establecimiento;<sup>32</sup> b) concentración del capital, presente tanto en el desdoblamiento creciente entre propietarios (devenidos en rentistas) y contratistas (propietarios de tierra o no) que poseen la maquinaria agrícola, y en la industrialización de granos, concentrada en un 80% por seis empresas;<sup>33</sup> c) concentración de la organización y gestión del proceso productivo mediante la consolidación de grandes empresas agropecuarias-financieras y la expansión de los pools de siembra. Asimismo, tomando el caso del circuito sojero, observamos una baja capacidad de generación de empleo, expresada en que su elasticidad empleo-producto del 0,12 contrastaba con la de 0,54 de la economía argentina.<sup>34</sup> En términos de condiciones laborales, el marco legislativo entonces vigente proveía menores derechos a los trabajadores rurales, con los mayores niveles de informalidad y las remuneraciones más bajas del país, transfiriendo recursos a los agentes propietarios del circuito. Esto evidencia una fuerte subsunción del trabajo frente a los agentes capitalistas, sumado a la creciente acumulación de dichos agentes y su interrelación dinámica en las nuevas lógicas del agronegocio (Varesi, 2010b).

Así, se fue conformando la dimensión estructural de las relaciones de fuerza que nos permite abordar el conflicto agrario de 2008. En este punto es necesario señalar un rasgo de la dinámica general del conflicto en el modelo productivo-exportador: un Estado activo que gestionaba el excedente transfiriendo recursos, pero que, al hacerlo, quedaba expuesto frente a los agentes que afectaba con sus políticas, al tiempo que los procesos de concentración incrementaban el poder de presión de los agentes económicos. A partir del establecimiento de la resolución 125 en marzo de 2008, que establecía un régimen móvil de retenciones variables según el precio internacional (presentando un aumento para soja y girasol, y una leve merma para trigo y maíz), se desató un antagonismo que sacudió las relaciones de fuerzas políticas. Se produjo rápidamente un traspaso del mero reclamo económico a la disputa por la hegemonía, constituyendo una guerra de posiciones a partir de tres factores centrales:

<sup>32</sup> Datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002.

<sup>33</sup> Datos presentados por Schvarzer y Tavosnanska (2007). Estos autores señalan que la capacidad de crushing de granos está concentrada en sólo 6 empresas: «tres de esas empresas son filiales de multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y tres son de capital local (Molinos, Vicentín y General Deheza)» (Schvarzer y Tavosnanska, 2007:44).

<sup>34</sup> Datos presentados por el Ministerio de Economía. Un análisis detallado sobre el empleo en la actividad agropecuaria puede encontrarse en CENDA (2008).

- 1) El discurso proveniente del polo agrario tendiente a la homogeneización, polarización y articulación de demandas más amplias, y una radicalización del discurso oficialista.
- 2) El repertorio de acción colectiva desplegado fue involucrando creciente beligerancia.
- 3) El rol de los principales medios masivos de comunicación como intelectual orgánico de lo que comenzaba a aparecer como un nuevo alineamiento de fuerzas, portando un proyecto político-económico de gobierno que antagonizaba con el oficialista.

En el polo agrario, presentado a sí mismo como «el campo», tuvo un rol protagónico la «Mesa de enlace»,<sup>35</sup> que articulaba a las patronales agrarias y a los «auto-convocados», conformados por productores movilizados que organizaban la acción colectiva, trascendiendo incluso las directivas de las patronales.

El discurso de este polo fue avanzando hacia una creciente eliminación de las diferenciaciones a su interior, lo que permitió el abroquelamiento y la polarización y, a su vez, la irreductibilidad de las posiciones dotó de mayor vigor a la dinámica del antagonismo. La heterogeneidad de agentes y actores era limada por varios factores. En primer lugar, por la unidad en torno a la demanda central: las retenciones. Esta demanda revestía para el polo «campo» una doble cualidad, por un lado permitía unificar disimulando las diferencias (de escala, modo de inserción en el circuito productivo, capacidad diferencial de apropiación de renta y ganancia, etc.) y, por otro lado, colocaba en la radicalización de la demanda (la exigencia de eliminación de las retenciones) el debate por el proyecto político-económico de gobierno, en tanto su consecución era incompatible tanto con el desarrollo del modelo de acumulación como con el modo de construcción de hegemonía vigentes. A su vez, siendo las retenciones un punto explicitado por el gobierno como «fuera de discusión», se reforzaba la mutación de reclamo sectorial a demanda política. En segundo lugar, la articulación de la cadena avanzó sobre otras demandas del sector (por ejemplo, en relación a la producción de carnes y lácteos, entre otras) realizándolo con una lógica discursiva que apelaba a registros históricos del imaginario colectivo como la reedición de la disputa «pueblos del interior» vs Gobierno central, actualizando el debate entre federalismo y centralismo, y peronismo/ antiperonismo, etc.

La lógica del antagonismo se fue radicalizando a través de la implementación de amplios repertorios de acción colectiva, con la particularidad de que las patronales apelaron a la apropiación y resignificación del acervo de protesta desplegado por los actores de las clases subalternas en 2001, como piquetes, cacerolas, asambleas y «escrache».

<sup>35</sup> Esta Mesa, formalmente llamada como Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, articuló a las cuatro entidades patronales agrarias de mayor relevancia: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Interooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), y se fue convirtiendo en el principal referente en la conducción de la protesta.



Por otra parte, la estrategia del gobierno tuvo un factor clave en el discurso de la Presidenta Cristina Fernández frente al conflicto. El mismo también fomentaba la polarización en tanto negaba legitimidad al reclamo y demarcaba a los agentes movilizados como antagonistas que procuraban restaurar la Argentina neoliberal, aun cuando eran principales beneficiarios de las políticas públicas. Frente a esa re-emergencia del pasado neoliberal, el discurso presidencial elevaba el pasado mítico que referencia la promesa de plenitud: el retorno a la Argentina peronista. Asimismo, se reforzó en el discurso el rol del Estado como mediación y su rol regulador, defendiendo los mayores niveles de autonomía relativa alcanzados.<sup>36</sup> Así se gestó la confrontación, promoviendo la homogeneización y polarización del conflicto, con base en el desarrollo de dos apelaciones ligadas a la cultura política del polo oficial: el enfrentamiento «pueblo vs oligarquía», remitiendo al peronismo originario, actualizado en la oposición entre «gobierno nacional y popular vs dictadura/neoliberalismo»,<sup>37</sup> como ya hiciera Néstor Kirchner en su propia presidencia.

El populismo como lógica político-hegemónica se alzaba así en toda su extensión y la estrategia discursiva oficial buscó construir una identidad que conquistara un amplio conjunto de significantes en el delineamiento de la comunidad, al tiempo que procuraba definir al polo opositor como la anti-comunidad. Sin embargo, falló en sus intentos de segmentar al polo «campo», buscando diferenciar a los pequeños de los grandes propietarios. En parte, se debió al papel de los principales medios masivos de comunicación y su alineamiento con las fuerzas opositoras, cumpliendo un rol de intelectual orgánico destacado, dando cohesión a la fuerza antagonista, dotándola de conciencia de intereses y fines, alentando su organización. Además, los medios permitieron aparecer al agro como un sector «agredido», aspecto que contrastaba con todos los indicadores, en tanto el análisis de rentabilidad mostraba que ya en 2007 estaba un 72% por encima del promedio de los años 90 e, incluso con la aplicación del esquema de retenciones móviles, habilitaba un incremento del 43% respecto de la campaña anterior (Arceo y Rodríguez, 2008). Esto nos permite pensar que no fue la «crisis» de los agentes involucrados que los llevó a la protesta, sino su fortalecimiento en el marco del cambio en las relaciones de fuerzas.

Así el antagonismo cobró forma a partir de un doble movimiento:

- 1) La politización del conflicto, superando el grado gremial de disputa para contener la simiente de lucha por un proyecto de gobierno alternativo. Tuvo lugar un proceso donde un conjunto de tensiones estructurales abonaron la emergencia del antagonismo. La

<sup>36</sup> Según la Presidenta, en el conflicto se definía «si queremos volver al país de unos poquitos o queremos volver a un país más justo, con mayor equidad, con mayor distribución» (25/3/2008). También señalaba que «antes que el sector, que antes que nuestra propia individualidad están los intereses del país y de la Patria. (...) la historia está de nuestra parte, porque la historia la construyen los pueblos» (25/5/2008).

<sup>37</sup> «Me di cuenta, entonces, que estaba ante otro escenario, ante otro cuestionamiento, ya no era retenciones sí o retenciones no, ya no eran intereses, se estaba socavando, se estaba interfiriendo en la misma construcción democrática» (Fernández 18/6/2008).

creciente autonomía relativa estatal chocó con los procesos de concentración económica, poniendo en el centro de la disputa al sistema de transferencias de recursos. Además se expresó una tensión entre la orientación estatal de garantizar precios bajos de alimentos, generar empleos y obtener divisas, frente a la búsqueda de optimizar ganancias privadas (Godio y Robles, 2008).

- 2) Se generó un profundo sacudimiento de las relaciones de fuerzas políticas que puso fin al estadio hegemónico, reabriendo un escenario de crisis que en el conflicto agrario actuó bajo la lógica unificación/dispersión: unificación hacia ambos polos, invisibilizando terceras partes y la gestación del alineamiento opositor, el cual logró derribar en el Congreso la medida de retenciones móviles (cuando el oficialismo buscó darle carácter de ley), infringiéndole su primera derrota; y un proceso de dispersión, con un desgranamiento parcial de la fuerza oficialista (perdiendo apoyos, como el vicepresidente que desempató en contra en el Senado).

Así, el antagonismo de 2008 dejó instalada la articulación de un alineamiento que abarcaba a agentes y corporaciones del agro, partidos opositores (con componentes de derecha política) y los principales medios de comunicación, el cual se conformó como adversario del oficialismo. Su composición social predominantemente patronal y la recuperación de demandas en torno a la desregulación, la apertura económica y la libertad de mercado y de ganancia como valores, reinstalando lecturas ligadas a la concepción de Estado mínimo, parecían confirmar la articulación de un alineamiento que encarnaba las pretensiones de las clases dominantes de recuperar el paradigma neoliberal como proyecto de gobierno. Se instituyó así un vértice tanto a nivel político como económico. En términos económicos, si bien no había quiebres fundamentales que permitieran entrever un cambio del modelo de acumulación, sí se comenzaron a observar medidas fuertes que inciden en las relaciones de fuerza entre las clases sociales, buscando fortalecer la participación de agentes productivos industriales y de las clases subalternas en el alineamiento oficial, las cuales empezaron a constituir un escenario propicio a la radicalización de los componentes heréticos del kirchnerismo. En el escenario político se pasó de un clima de búsqueda de consensos, a un enfrentamiento más abierto entre los adversarios. Así se observó una mayor confrontación en las calles y el Congreso, tanto para dar cauce a las políticas públicas como para enfrentarlas.

El avance de la confrontación gobierno-oposición empezó a expresar más claramente distintos proyectos de gobierno y con sus respectivas alianzas de clases, planteando una doble tensión. Una tensión restrictiva referida a que se gesta una polarización tendiente a consolidar una reformulación del bipartidismo —desgastado en 2001— en dos nuevos polos de centro-izquierda y centro-derecha, ocupando el oficialismo el primero y la oposición conservadora el segundo; esto dificultaba la emergencia y desarrollo de otras opciones alternativas basadas en las clases subalternas, tendiendo algunas organizaciones a plegarse al

oficialismo y otras a caer en una oposición a ultranza, muchas veces funcional a la estrategia de la derecha. Y una tensión expansiva, que implicaba la posibilidad desde el conjunto de organizaciones de las clases subalternas de promover mejoras, ya sea a través de políticas y leyes como de disputas sectoriales a partir del conflicto, aprovechando el espacio abierto por la crisis desatada al interior de la clase dominante. Esta crisis está caracterizada por el fin del momento hegemónico alcanzado hacia 2006-2007 y el nuevo desarrollo de fragmentación política al interior de la burguesía, entre, por un lado, sus elementos dispuestos a aceptar algún grado de acuerdo y transferencias de recursos hacia las clases subalternas y, por otro, los grupos más conservadores del capital que, en busca de proteger sus privilegios, se volcaron crecientemente hacia el alineamiento opositor. Este contexto generó un marco propicio para el desarrollo de otros núcleos de conflicto favorables a las clases subalternas.

### **Conclusiones: tensiones y reflexiones ulteriores**

El análisis del período de configuración del modelo productivo-exportador, como primer experiencia de un régimen neo-desarrollista, y la construcción de hegemonía entre 2002 y 2008, nos permite dar cuenta de algunas dinámicas centrales que caracterizaron todo el período que se extendió hasta fines de 2015.

Observamos algunas tensiones entre el modelo de acumulación, el proyecto político-económico de gobierno y la constitución del sujeto. A nivel económico, mientras que el proyecto contenía la idea de un «capitalismo nacional», nos encontramos con una estructura económica que poseía un alto grado de concentración y extranjerización, lo cual permitía cuestionar la idea de una «burguesía nacional», que pudiera establecer una alianza virtuosa con los trabajadores llevando a un desarrollo soberano. Damos cuenta de una dinámica contradictoria establecida entre dos fracciones del capital: a) una fracción productiva-exportadora, que ocupaba un lugar central en el modelo, fuertemente extranjerizada y concentrada, beneficiada por el tipo de cambio; y b) una fracción de PyMEs, con mayor nivel de capital local y orientada principalmente al mercado interno, pero cuyas limitaciones de escala y productividad recaían en una magra calidad de empleos y salarios.

La predominante extranjerización, visible en la estructura económica, no implicaba la desaparición del capital local, sino su subordinación a las lógicas transnacionalizadas de acumulación y al liderazgo de empresas de envergadura global. Las empresas extranjeras no sólo recompusieron sus ganancias, sino que superaron las obtenidas en promedio durante el modelo anterior y, a pesar de ello, era poco lo que dejaban en el país. La orientación exportadora del gran capital productivo conllevaba que el salario no era visualizado como un factor fundamental para la realización del capital, sino como un costo que se buscaba limitar para ganar rentabilidad. Así, una de las claves de la competitividad y las ganancias empresariales se encontraba en el aumento de la productividad laboral no retribuida vía

salario, teniendo como hito inicial del modelo una fuerte disparidad en la evolución de precios y salarios que provocó una fuerte reducción del costo laboral. A su vez, el fuerte descenso de la desocupación iría dotando al movimiento obrero de mayor capacidad de disputa, mejorando salarios vía convenio colectivo, frente a lo cual, el polo del capital comenzaría a generar un traspaso a precios, dando origen a un nuevo ciclo inflacionario desde 2007.

Tampoco era posible hallar el rol de la burguesía nacional en los agentes de la fracción de PyMEs, ya que, si bien estaba compuesta por empresas de capital nacional orientadas al mercado interno y claves en la generación de empleo, su baja productividad y escala de producción derivaron en que su rentabilidad y condición de existencia tendiera a yacer en el incremento de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, ofreciendo en promedio bajos salarios y altos índices de informalidad laboral. Estos factores disminuyeron las complementariedades posibles con la clase trabajadora. Más aún, podríamos arriesgarnos a decir que las PyMEs terminaron teniendo complementariedades con el gran capital en términos de la lógica de tercerización, ya que muchas veces abastecían de insumos a las grandes empresas, generando hacia estas trasvasamientos del plusvalor obtenido en las mayores condiciones de explotación. Al mismo tiempo, las grandes empresas las oxigenaban al proveer salarios, relativamente altos en pesos, a un segmento de las clases subalternas que, en complementación a las políticas progresivas de ingresos desplegadas desde 2003 y la recuperación del empleo, permitieron la expansión del consumo y el mercado interno.

El inicio regresivo del modelo con la salida devaluacionista-inflacionaria de 2002 dejó establecido un conjunto de «reglas de juego» que modelaron las relaciones de fuerzas entre las distintas fracciones de clase. En este complejo cuadro se gestó el modelo productivo-exportador sustentado en el doble superávit, comercial y fiscal, pero estos dos pilares de estabilidad comenzaron a estar amenazados por distintos flancos. Por un lado, la ausencia inicial de un proyecto de industrialización planificado impidió revertir la desarticulación productiva y muchas de las industrias que se reactivaron a través del principal instrumento utilizado (el tipo de cambio) requirieron un alto componente de insumos importados.<sup>38</sup> Incluso en el contexto auspicioso analizado, notamos que la balanza comercial de la industria, que había roto inicialmente la tendencia de la década anterior al volverse superavitaria, comenzó a deteriorarse con las nuevas dificultades que agregó el advenimiento de la crisis capitalista mundial, abriendo lugar a las tensiones propias de la necesidad de financiar con divisas los déficits sectoriales. A su vez, el superávit comercial se encontraba ligado al precio de los commodities, mostrando una vía de vulnerabilidad externa, y el superávit fiscal estaba vinculado al comercial a partir de la importancia de las retenciones, al tiempo que los recursos fiscales eran fundamentales para la gestación del sistema de transferencia de recursos

<sup>38</sup> Un análisis detallado de la dinámica industrial puede encontrarse en Schorr (2012).

con los que el gobierno construía hegemonía. Por otra parte, la recaudación tributaria se vinculaba al crecimiento económico, que comenzaba a transitar un camino complejo con la emergencia de la crisis mundial, y al consumo popular (a través del IVA) limitado por la distribución funcional que no había sido transformada radicalmente. De este modo, se tensionaron estos dos pilares, claves en términos de acumulación y hegemonía. Además, al constituirse el Estado en un actor fundamental cada vez más visible de la distribución diferencial de recursos a través del sistema de transferencias, el mismo (y la fuerza política que lo conduce) quedó expuesto ante los agentes que grava y beneficia. A su vez, esta tensión cobró creciente relevancia en cuanto los principales agentes económicos siguieron incrementando su poder estructural, debido al aumento de su margen de ganancia y a la continuidad de los procesos de concentración.

Quedaron establecidas un conjunto de tensiones a nivel del modelo de acumulación que, al mismo tiempo, no son ajenas a las tensiones que acarreó el propio proyecto de gobierno que inspira el componente de políticas y la cultura política en la cual éste se enmarcaba. En este punto, explicitamos una conclusión que refiere a que los componentes heréticos y normalizadores de la fuerza hegemónica dieron lugar a una dinámica político-económica con dos motores. Un primer motor que anidaba en las superestructuras complejas: la construcción de consensos en la sociedad civil con base en las transferencias de recursos, donde el rol del trabajo volvió a recuperar relevancia e incluso dio lugar a una política de no-represión del conflicto social. Por primera vez, desde la instauración del neoliberalismo en Argentina, volvió a establecerse una política progresiva sostenida en el tiempo. El elemento herético del kirchnerismo encontró vía de realización en: el avance de las políticas sociales, de empleo e ingresos; la unidad latinoamericana que fue cobrando algunos ribetes antiimperialistas; el proceso de democratización y participación política que impulsaba; y la política de DDHH que era parte de una confrontación más general con el legado del tándem dictadura-neoliberalismo, entre otros. Fue justamente esta conformación del adversario, y los rasgos objetivos que el mismo fue cobrando en el conflicto, lo que caracterizó la reapertura generalizada del antagonismo y alienta a la proliferación de los componentes populares y transformadores dentro del kirchnerismo. Estos son avances concretos que abonaron el carácter nacional-popular del proyecto y que tuvieron como hitos el rechazo al ALCA, y la ruptura con el FMI, ampliando márgenes de autonomía relativa.

Pero hay también un segundo motor, ligado a la dimensión económico-estructural que, si bien avanzó rompiendo con algunos patrones característicos del neoliberalismo, lo hizo más lentamente. Las persistencias regresivas en materia de matriz productiva con la inserción subordinada de Argentina al mercado mundial como proveedora de recursos naturales y mano de obra relativamente barata, la explotación no sustentable de los recursos hidrocarburíferos y mineros, los problemas ligados a la explotación del recurso tierra y, sobre

todo, las limitaciones en materia de distribución funcional, fueron parte de continuidades que retrasaron el proceso de cambio a nivel estructural. Aquí la concentración y extranjerización económica vigentes pusieron fuertes límites tanto al componente nacional como al popular del proyecto de gobierno, lo cual se ligó a la tensión de encorsetar la matriz nacional-popular a un horizonte de «capitalismo serio».

Esto tiene que ver con las tensiones gestadas a nivel del modelo, en términos de la reproducción ampliada de las clases sociales que el mismo implica: a) la existencia de una burguesía fragmentaria, con capitales rectores fuertemente concentrados y extranjerizados, y capitales subordinados con problemas de escala y productividad, frágilmente conectados al sistema financiero, articulados en una complementariedad deficitaria; b) la relación capital/trabajo se articuló diferenciadamente en su inserción en estas disímiles experiencias de explotación, desde los mejores salarios con mayor nivel de formalidad, pero mayor extracción de plusvalía relativa en el gran capital, y la masificación del empleo pero con altos índices de informalidad y bajos salarios propios de las PyMEs; c) aun así, el descenso global de la desocupación generó una base estructural que habilitó el fortalecimiento del movimiento obrero; y d) esto, sumado a los factores que mencionamos dentro de la tensión expansiva del escenario político, dio aire tanto a los componentes heréticos dentro del kirchnerismo como a las organizaciones populares en términos generales.

Otra tensión del período es la que comenzó a darse entre el aumento de la autonomía relativa del Estado y la persistencia del carácter oligopólico en la economía. Esto creó un sustrato estructural de tensiones vinculadas al esquema mismo de construcción de hegemonía. En este punto no podemos dejar de notar que los apoyos de los agentes dominantes al proyecto kirchnerista parecieron estar fundados más en la multiplicación de las ganancias que presentaron las empresas de la cúpula económica, que en una adhesión ferviente a un proceso de desarrollo nacional. Esta constituyó una base estructural para la gestación de nuevos antagonismos, ya que distribuir implicaba afectar recursos, disciplinar agentes dominantes que se habían acostumbrados a imponer sus propias condiciones al poder político durante las décadas de neoliberalismo. Así, cada intento de restringir ganancias fue creando una coyuntura de enfrentamiento. Esto se ligó a su vez con que, desde el conflicto agrario en adelante, entró en escena una alternativa conservadora al proyecto y modelo en vigencia, en tanto un conjunto de agentes de la clase dominante comenzaron a capitanear un nuevo alineamiento que empezó a recuperar aspectos del neoliberalismo como proyecto de gobierno. Es así que arribamos a una nueva conclusión: parece que el punto central de las tensiones se anudaron en el par profundización rupturista vs restauración neoliberal.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Nótese que estas conclusiones comenzaron a delinearse como fruto del proceso de investigación en el año 2012, a pocos meses de que Cristina Fernández de Kirchner había ganado la reelección –fines de 2011– con el 54% de los votos y la oposición aparecía como públicamente derrotada. Todo el proceso posterior, que derivó en el triunfo de la oposición liberal y conservadora a fines de 2015, pareció ir confirmando los principales aspectos de las conclusiones derivadas de la tesis de investigación.

¿Por qué? Porque en el alineamiento conservador comenzó a contar el apoyo con grupos sociales poderosos, incluyendo a los principales medios masivos de comunicación, con gran potencial de incidencia en la construcción de sentido y articulación de demandas, cumpliendo un rol destacado como intelectual orgánico. Este alineamiento ya había mostrado capacidad de movilización en las calles, de disputa electoral y de crear opinión e instalar agenda pública. Nada mostraba que los grupos dominantes que pasaron a la oposición podían ser neutralizados en el corto plazo, lo cual dio vida al polo restauracionista. Por otra parte, el polo de profundización remitía al avance de mayores rupturas y quedaba establecido porque eran precisamente las continuidades reminiscentes del régimen neoliberal, lo que conformaba el sustrato de la relación de fuerza estructural favorable a los restauracionistas. Además, perdiendo aliados en las clases dominantes, el kirchnerismo se vio compelido en los años posteriores al conflicto agrario a generar mayores transformaciones, profundizando alianzas con las clases subalternas, alimentando su propio componente herético. Incluso el contexto latinoamericano alentaba la dinámica profundización/restauración, ya que Argentina se encontraba articulada en el bloque regional con los procesos revolucionarios de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que, entre otros gobiernos populares, lideraron un cambio continental anti-neoliberal, con crecientes rasgos antiimperialistas y que plantearon la necesidad de superación de la sociedad de clases en nuevas búsquedas con horizonte socialista. Los intentos desestabilizadores promovidos por EEUU y algunos grupos dominantes locales no hicieron más que evidenciar el rol geopolítico de la alternativa restauracionista, con un visible signo reaccionario que no hacía demasiada distinción entre neo-desarrollistas y socialistas, al menos mientras estos formasen parte del mismo bloque continental.

¿Pero a qué nos referimos por profundizar y qué implica? La pregunta por la profundización está, en parte, ligada a la velocidad de los «dos motores», a la necesidad de equiparar los cambios a nivel económico-estructural con la potencia de los cambios ideológico-culturales que proclamaban a la política y a la participación popular como vía de dirección de las sociedades. Pero, nuevamente: distribuir conlleva siempre enfrentamiento. El desarrollo del «capitalismo serio» incluía la necesidad de disciplinar al menos parcial y gradualmente a la burguesía, una burguesía concentrada y acostumbrada a no ser regulada ni menos disciplinada, con décadas de relaciones preferenciales con un Estado que le había sabido garantizar la proliferación de diversos ámbitos privilegiados de acumulación, muchos de los cuales, como señala Castellani (2010), continuaron durante la post-convertibilidad. Cada acción disciplinadora corría el riesgo de que el agente disciplinado pasara a formar parte de las filas del adversario. Problema aún mayor cuando se trataba de agentes con gran poder estructural, con poder de decisión sobre las variables económicas, como la formación de precios, la inversión, el empleo, la posesión de divisas, etc. Había ahí una limitante del

sistema de transferencia de recursos con base en el pacto populista. Del otro lado, las clases subalternas precisaban de crecientes resoluciones de demandas que se fueron acumulando en las décadas de oprobio neoliberal.

En términos de hegemonía las tensiones no eran menores. Aparecía la pregunta por la guerra de posiciones y por la construcción de poder. El Príncipe moderno en clave kirchnerista comenzó a constituirse desde el Estado mismo: era un sujeto político nacido con una fuerte lógica estatista. Una fuerza de este tipo tenía posibilidad de crecer rápidamente con base en la potencia que habilitan los recursos estatales, pero estos no garantizaban la solidez de la construcción y la pérdida de la conducción del Estado podía infringirle un duro golpe y arrastrar a los intelectuales orgánicos menos afianzados a la fuerza que detentara con posterioridad los recursos. En términos de las clases sociales, si las solidaridades dominantes dependían de la tasa de ganancia y eran por ello altamente inestables, las solidaridades del campo popular requerían de los avances en la resolución de demandas, pero su alcance y sustentación también se encontraban ligados al tipo de poder construido. Parecía necesario, para la formación del sujeto-pueblo, que se destinaran crecientes esfuerzos a favorecer la auto-organización de los sectores populares, como vía para sustentar solidaridades duraderas que permitieran el sostenimiento de los avances y la profundización del proyecto. También era clave la participación del movimiento obrero organizado, por su peso y lugar estructural (pero el mismo siguió un camino de creciente fragmentación). Y esto, a su vez, no podía dejar de estar en relación con el desempeño de los componentes «heréticos», «plebeyos» de la propia fuerza en formación.

La tensión que atravesó aquí al modelo y a la construcción hegemónica ponía en juego la articulación de demandas de portadores heterogéneos, anclados estructuralmente en una relación de contradicción y, por ende, de tendencia al conflicto. Es aquí que recordamos que cuanto más amplia es una cadena más inestable se torna: la combinación de los elementos sistémicos y heréticos era igualmente inestable. No eran novedad los enfrentamientos entre actores conservadores y transformadores en los sujetos políticos constituidos bajo la lógica del pacto populista. Había no solo que observar la dinámica polarizada de los escenarios políticos contemporáneos entre fuerzas de cambio y de restauración, sino que también había que ver al interior de los sujetos en formación. Todo sujeto tiene en su creación componentes ex novo, que son irreductibles a la previa historia de demandas y portadores, pero dicho sujeto no es independiente de estas demandas y portadores, y la cultura política hegemónica marca el carácter del pueblo en formación. Así, un sujeto de este tipo podía perecer no sólo por el daño que le causara el adversario en la guerra de posiciones, sino que podía ser golpeado desde su interior, por ejemplo, por la subordinación o anulación de los elementos heréticos por parte de los sistémicos. Pero también podía acontecer lo contrario, que la lógica del antagonismo diera vida a los elementos heréticos y que éstos



terminaran predominando, asunto que finalmente no sucedió. Este es otro camino de ruptura del pacto populista, que implicaba la radicalización de los elementos populares avanzando a la instauración de un horizonte de cambio societario de raíz: replanteando la necesidad de superación del propio capitalismo. Casos como el de la izquierda peronista de los 70 y la emergencia del «socialismo nacional», del chavismo venezolano con el «socialismo del siglo XXI», Bolivia con el «socialismo comunitario» o Ecuador con la revolución ciudadana y el «socialismo del buen vivir», constituyen ejemplos de movimientos que originalmente no planteaban un horizonte de ruptura sistémica, pero que sin embargo, al calor del antagonismo comenzaron a percibir su necesidad. En nuestro caso, este escenario parecía depender que dentro del sujeto parido del pacto populista comenzara a percibirse que, para vencer sobre el polo restauracionista, era necesario vencer en simultáneo, a través de un cambio de relaciones de fuerzas, a los componentes sistémicos de su propio interior, trascendiendo el pacto social en una dinámica de reforma-revolución.

Como es ahora sabido, la historia fue otra, las propias limitaciones y contradicciones que concluimos a partir del análisis del modelo de acumulación y la construcción de hegemonía entre 2002 y 2008, a pesar de tener distintos vaivenes con avances y profundizaciones importantes manifestadas en distintas rupturas, no logró superar el corset sistémico: la extranjerización limitó la potencia nacional del proyecto y, la concentración económica, su potencia popular. A su vez, la revitalización de la estrategia imperialista sobre la región y el avance de los grupos del capital concentrado a nivel local dieron creciente sustento a las coaliciones restauracionistas, que en la actualidad se están imponiendo, como en el caso de Argentina, y motivan nuevas transformaciones estructurales que reenvían a nuestras naciones a las oscuras épocas de la subordinación dependiente, con pérdida de soberanía nacional, y a mayores niveles de concentración con base en una nueva ola de reformas neoliberales, con un sesgo revanchista y anti-popular, que avanzan a desestructurar las conquistas previamente alcanzadas.

## Referencias bibliográficas

**Arceo, Nicolás y Javier Rodríguez** (2008). «Inflación, retenciones y rentabilidad agrícola. Ganan como nunca» en *Cash*, *Página 12*, 16/3/08. Buenos Aires.

**Azpiazu, Daniel y Martín Schorr** (2003). *Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

**Azpiazu, Daniel y Martín Schorr** (2010). *Hecho en Argentina Industria y economía, 1976-2007*. Buenos Aires, Siglo XXI.

**Basualdo, Eduardo** (2003). «Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera» en *Realidad Económica*, n° 200, Buenos Aires.

- Basualdo, Eduardo** (2007). «Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía», en Documento n°1, Maestría en Economía Política Argentina, Área de Economía y Tecnología, Buenos Aires, Flacso.
- Basualdo, Eduardo** (2008). «La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales», en Memoria Anual 2008, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Basualdo, Eduardo** (2011). *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual*, Buenos Aires, Cara o Ceca.
- Castellani, Ana** (2010). «Estado y grandes empresarios en la Argentina de la post-convertibilidad», en *Cuestiones de Sociología, Revista de Estudios Sociales*, n°5/6, La Plata, FAHCE-UNLP.
- Cenda** (2008). «Condiciones de trabajo y distribución del ingreso en el sector agropecuario» en *El trabajo en Argentina. Condiciones y perspectivas*. Buenos Aires, Cenda, Informe trimestral, n°15.
- Cifra** (2012). «Información sobre asignaciones familiares e impuesto a las ganancias. Cómo afectan a los trabajadores», Documento de Trabajo n°12, mayo. Disponible en: <http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20-%20DT%2012%20-%20Asignaciones%20familiares%20e%20imp%20gananc.pdf>
- Cobe, Lorena** (2009). *La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación*, Colección Claves Para Todos (Nun coord.), Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Cooke, John William** (2010). *Peronismo y revolución. El peronismo y el golpe de Estado, informe a las bases [1971]*. Buenos Aires, Biblioteca Popular.
- Cremonese, Juan Pablo** (2007). «El estilo de actuación política de Néstor Kirchner» en E. Rinesi, G. Nardacchione y G. Vommaro (eds.) *Los lentos de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Buenos Aires, Prometeo Libros, UNGS.
- Damill, Mario, Roberto Frenkel y Martín Rapetti** (2005). «La deuda argentina: historia, default y reestructuración», en *Cedes*, n°16, Buenos Aires.
- Diamond, Marcelo** (1972). «La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio», en *Desarrollo Económico*, vol. 12, n°45. Buenos Aires.
- Fal, Juan, Pinazo, Germán y Lizuain, Juan** (2009). «Notas sobre la post-convertibilidad: los límites a la mejora en las condiciones de vida de los sectores populares», en *Periferias, Revista de Ciencias Sociales*, n°18. Buenos Aires, Ediciones FisyP.
- Godio, Julio y Alberto J. Robles** (2008). *El tiempo de CFK. Entre la movilización y la institucionalidad. El desafío de organizar los mercados*, Buenos Aires, Corregidor.
- Gramsci, Antonio** (2003). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Gramsci, Antonio** (2004). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Graña, Juan M. y Damián Kennedy** (2007). «Salarios y productividad: especificidades de tamaño en la distribución del excedente», I° Jornadas de Economía Política, 6 y 7 de diciembre. Los Polvorines.
- Indec** (2009). «Grandes Empresas en la Argentina. Año 2007» con base en ENGE.
- James, Daniel** (2006). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Kulfas, Matías** (2011). *Las PyMEs y el desarrollo. Desempeño presente y desafíos futuros*. Colección Clave para Todos. Buenos Aires, Capital Intelectual.

**Laciar, Ernesto** (2005). *La razón populista*. Buenos Aires, FCE.

**Lozano, Claudio, Ana Rameri y Tomás Raffo** (2007). «La cúpula empresaria argentina luego de la crisis: los cambios en el recorrido 1997-2005», Buenos Aires, IEF-CTA.

**Matus, Carlos** (2007). *Los tres cinturones del gobierno*. Buenos Aires, Ediciones Universidad de la Matanza, CiGob, Fundación Altadir.

**Muñoz, María Antonia y Martín Retamozo** (2008). «Hegemonía y Discurso en la Argentina contemporánea. Efectos políticos de los usos de «pueblo» en la retórica de Néstor Kirchner», en *Revista Perfiles Latinoamericanos*, n° 31, pp. 121-149. México.

**Ortiz, Ricardo y Martín Schorr** (2007). «La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la post-convertibilidad», en *Papeles de trabajo*, Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, año 1, n° 2. Buenos Aires.

**Poulantzas, Nicos** (1981). *Las clases sociales en el capitalismo actual* [1976], México, Siglo XXI.

Santarcángelo, Juan E. y Guido Perrone (2012). «La cúpula empresaria e industrial en Argentina durante la Postconvertibilidad: transformaciones, rentabilidad y empleo», en *Análisis Económico*, n° 64, vol. XXVII, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

**Schorr, Martín** (2012). «Industria y neodesarrollismo en la posconvertibilidad», en *Voces en el Fénix*, Disponible en: <http://www.vocesenelfenix.com/content/industria-y-neodesarrollismo-en-la-posconvertibilidad>

**Schvarzer, José y Andrés Tavosnanska** (2007). «El complejo sojero argentino. Evolución y perspectivas», en Documento de Trabajo n°10, Buenos Aires, CESP, UBA

**Sevares, Julio** (2010). «Argentina: Los bancos te dan sorpresas», en *Olafinanciera*, n°7, septiembre-diciembre. México, UNAM.

**Torrado, Susana** (1992). *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*. Buenos Aires, Ed. De la flor.

Varesi, Gastón (2010a). «La Argentina post-convertibilidad: modelo de acumulación», en *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, vol. 41, n° 161. México, IIEE, UNAM.

**Varesi, Gastón** (2010b). «El circuito productivo sojero argentino en el modelo post-convertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional» en *Revista Cuadernos del Cendes* n°74, Cendes-UCV, Caracas.

**Varesi, Gastón** (2014). «La construcción de la hegemonía kirchnerista en Argentina, 2003-2007» en *Temas y Debates* n°28, año 18, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.